

Considerando: que el acuerdo económico del Congreso refiriéndose á un hecho particular que con motivo de un empate habido en dicho Consejo, no ha podido derogar lo prescrito por la Constitución del Estado y el art. 16 de la ley que lo reglamentó, el gobernador estaba obligado á conceder el indulto al quejoso.

Considerando: por otra parte, que éste solicitó su indulto antes de que existiera tal acuerdo, y con presencia del artículo del Código fundamental de la República que declara inviolable la vida del hombre, mandando no pueda privársele de ella, sino en los únicos casos que lo permite y con exacta aplicación de las leyes que se la quitan. Por tales consideraciones se declara: que se revoca la sentencia pronunciada respecto de este juicio á tres de Julio del año próximo pasado, que niega el amparo al quejoso, y es decreta: que la Justicia de la Unión ampara y protege á Juan Ramírez contra el acto del ciudadano gobernador del Estado de Jalisco que le negó el indulto de la pena de muerte á que fué condenado por el jefe político de Tequila.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Sinón Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico.—México, Marzo 11 de 1875.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por D. José Ponciano Fernandez, contra el juez conciliador de la municipalidad de Villa Lerdo, del Partido de Mapimé, quien como ejecutor de una orden del gobierno del Estado comunicada al jefe político de Mapimé, le impidió ejercer como médico y cirujano.*

### PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El ciudadano jefe de Hacienda del Estado encargado de llevar la voz fiscal, dice: que Don J. Ponciano Fernandez pide amparo contra las providencias del Juez Conciliador de Villa Lerdo, en virtud de las cuales lo suspendió en el ejercicio de su profesión médica, violando en su persona las garantías que otorgan los arts. 4 y 16 de la Constitución general de la República.

Por el informe de fojas 9 y 10, se viene en conocimiento, de que el motivo de haber suspendido al quejoso en el ejercicio de la profesión médica, fué el de no haber presentado su título respectivo para justificar que es profesor de medicina, en cuyo solo caso podría permitírsele ejercerla. Consta por el propio informe, que aquella disposición emanó del gobierno del Estado, que es autoridad competente para expedirla, y aun lo es también el Juez Conciliador de Villa Lerdo y cualquiera otra autoridad legítima, para impedir todo abuso que produzca perjuicios públicos; no pudiendo ser estos mayores que los muy funestos que puedan provenir de poner la vida de las personas enfermas en manos de otra que no posea los conocimientos de la ciencia, indispensables para que la autoridad y el público le deposite su confianza en tan delicada materia.

El quejoso, por su parte, no ha presentado ningún título con que justificar que es profesor recibido en la ciencia médica,

pues las dos certificaciones y demas apuntes sin autorizar que acompañó á su escrito, no importan ni el título respectivo ni comprueban que en alguna vez lo haya obtenido.

La garantía que otorga el art. 49 de la Constitución general de la República, consiste, en que á ningún hombre se le puede impedir que abraza la profesion, industria ó trabajo que le agrade *siendo útil y honesto*. Mas no puede decirse que es útil á la sociedad admitir á un ciudadano en el ejercicio de la ciencia médica, cuando éste no ha justificado con su título respectivo, la aprobacion que haya obtenido para ejercerla. Ni es honesto para ningún hombre, ejercer una profesion, de la cual no tiene título legal:

Por lo expuesto queda demostrado, que el Juez Conciliador de Villa Lerdo, no ha violado ningunas garantías individuales con los procedimientos de que se queja el promovente. No siendo útil á la sociedad, la profesion que este ejerce, con la suspension de ella no se ha violado la garantía del art. 49. Y siendo competente, como lo es, la autoridad que dictó la providencia, no existe la violacion de la garantía otorgada en el art. 16.

Por tales razones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución general de la República, el fiscal pide la denegacion del amparo solicitado por D. Ponciano Fernandez, contra los procedimientos del Juez Conciliador de Villa Lerdo; agregando que se le imponga al primero una multa de cien pesos, con arreglo al art. 1 de la ley de 20 de Enero de 1869.—Durango, Noviembre 27 de 1874.—*Juan Nájera*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Durango, Diciembre 7 de 1874.—*Juan Nájera*.

*Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Durango, Diciembre 5 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por Don Jo-

sé Ponciano Fernandez, contra el procedimiento del Juez Conciliador de la Municipalidad de Villa Lerdo, del Partido de Mapimí, que, como ejecutor de una orden escrita de la jefatura política de aquel Partido, que á su vez la habia recibido del gobierno del Estado, á quien la junta de sanidad habia denunciado el hecho de estar ejerciendo el quejoso la facultad médica, sin tener título ó acreditado legalmente el ejercicio de aquella profesion; por cuyo motivo se le impidió ejercerla, notificándole la prohibicion, y poniéndose el aviso público correspondiente, previa una informacion de los hechos en que se fundó el acto reclamado, que el quejoso estima como una violacion de los arts. 4 y 16 de la Constitución federal, sin haber rendido prueba alguna, ni alegado por sí, ni por medio de personas que lo representaran, el fundamento de su recurso.

Visto el informe de la autoridad responsable, el parecer fiscal, y todo lo demas que de autos consta y ver convino.

Considerando: que por no estar reglamentado el art. 49 de la Constitución, que prescribe y garantiza la libertad de las profesiones, que, por el artículo anterior, han de requerir título para su ejercicio, el de la ciencia médica está sujeto por ahora á lo que ordenan las leyes del Estado: que sin necesidad de estimar los oficios de aquella profesion, á que se ha dedicado el Sr. Fernandez, como honestos, ni como nocivos, ni tener para que examinar los hechos comprobados que se le imputan, segun la informacion que se asegura haberse levantado en su contra, y que no se ha presantado en este juicio, ni desmentido por el quejoso mismo; y que aún cuando hubiera sido satisfactoriamente contraria por su parte, el hecho es, que no tiene, ó que no ha presentado debidamente el título que lo acredita como médico, para ejercer aquella profesion; y que en consecuencia, el gobierno del Estado, la jefatura política de Mapimí y el Juez Conciliador de Villa Lerdo, han podi-

do impedirle medicinar en la forma en que este último procedió, conforme al art. 29 del reglamento de la junta de sanidad, mandado formar y aprobado por decreto de 21 de Abril de 1856, publicado en 5 de Julio del mismo año: que por lo mismo, el acto reclamado ha sido propio de la autoridad responsable, ó de las atribuciones ó facultades de que se haya investida, por lo que, no importa, ni puede importar violación alguna de los arts. constitucionales citados. Por tales consideraciones y de conformidad con el pedimento fiscal, se declara: que la Justicia federal, no ampara ni protege á D. José Ponciano Fernandez, contra el procedimiento del Juez Conciliador de Villa Lerdo, que le ha impedido el ejercicio de la profesion de médico.

Hágase saber, publíquese este fallo en el periódico oficial del Estado, y en el *Semanario Judicial de la Federación*, remitiéndose al efecto las copias certificadas, y clévase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El ciudadano Juez interino de Distrito, definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó, por ante mí. Doy fé.—*J. Chavarria*.—Una rúbrica.—*Juan B. Arellano*, secretario.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Durango, Diciembre 7 de 1874.—*Juan B. Arellano*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Enero 6 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por D. José Ponciano Fernandez, contra el juez conciliador de la municipalidad de Villa Lerdo, del Partido de Mapimí, quien como ejecutor de una orden del gobierno del Estado comunicada al jefe político de Mapimí, le impidió ejercer como médico y cirujano, y publicó un aviso haciendo saber esa resolución, por lo que se queja Fernan-

dez de haberse vulnerado en su persona la garantía á que se refiere el art. 4º de la Constitución general; y

Considerando: Que el quejoso no ha probado que tenga título legal para ejercer como médico cirujano, título necesario para que se le repute médico cirujano titulado; y que tal título no es indispensable para que el quejoso asista á las personas que en lo particular ocurran á él para que las atienda, sin considerarlo como tal médico cirujano.

Por lo expuesto y de conformidad con lo que previene el art. 101 de la misma Constitución, se decreta: que se modifica la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 5 de Diciembre próximo pasado por el Juez de Distrito de Durango, y se declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á D. José Ponciano Fernandez, contra los actos de que se queja, en la parte que se refieren á prohibirle que ejerza la medicina y cirugía como profesor titulado.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándola testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*M. Auza*.—*Juan J. de la Garza*.—*José Arteaga*.—*Ignacio Ramirez*.—*Manuel de Castañeda y Nájera*.—*S. Guzman*.—*L. Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramirez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 23 de 1875.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.